

# Valladolid, quinta ciudad de España donde más crecen los desahucios

El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre ascendió a 167, un 18,4% más que el año pasado • Esta evolución contrasta con la bajada generalizada en casi todo el país

• El Ayuntamiento trabaja en la puesta en marcha de un punto único de información donde se gestionarán los alquileres sociales municipales y los de la Junta de Castilla y León.

ÓSCAR FRAILE / VALLADOLID

La lucha que las administraciones dicen haber declarado al problema de los desahucios no arrojó buenos resultados en Valladolid durante el primer trimestre. Según los datos que hizo públicos ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de lanzamiento realizados entre enero y marzo en la provincia ascendió 167, un 18,4 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Llama la atención esta subida si se tiene en cuenta que la tendencia en el resto del país es totalmente contraria, con una bajada del 11,6 por ciento. Además, cabe destacar que es la quinta subida más pronunciada de España, solo por detrás de Cáceres (74,2 por ciento), Palencia (25 por ciento), Soria (21,1 por ciento) y Huesca (20,8 por ciento).



Algimira y Jesús perdieron su casa de La Rondilla, pero siguen viviendo en ella gracias a un alquiler social. / J. TAJES

El Ayuntamiento trabaja en el desarrollo de la mesa de intermediación hipotecaria

El Gobierno aprobó a principios del año pasado una prórroga hasta mayo de 2017 del periodo de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables. Para beneficiarse de esta norma, el deudor debe cumplir con unos requisitos que tiene que demostrar con documentación. Un procedimiento que no siempre llega a tiempo, según la abogada de Stop Desahucios, Victoria Hernando. «Hay que presentar muchos documentos y en ocasiones no es fácil, pese a que muchas veces es para demostrar que se cumplen requisitos estúpidos, como que hay un niño menor de tres años en la familia», explica. «Si el niño tiene cuatro años, ya no se puede hacer, y así con otras cosas, como los mayores de 60, etcétera», añade la letrada. Este colectivo se reúne todos los lunes para ayudar a las personas que se encuentran en esta situación. Y cada vez son más las que llaman a su puerta, no para evitar un desahucio, sino para pedir ayuda con las consecuencias que llegan después del lanzamiento. Hernando opina que los desahucios han estado más presen-

## «El banco se ha quedado con nuestra casa y ahora nos pide cien mil euros»

Jesús y Algimira sufrieron un desahucio de su vivienda de La Rondilla después de contraer una deuda de 200.000 euros

Ó. F. / VALLADOLID

La historia, por repetida, no deja de ser extremadamente dura. Jesús Valentín y Algimira Navarro compraron la casa que pensaban que iba a ser de sus sueños en La Rondilla. Concretamente, en la calle Moradas. Es un quinto sin ascensor de 75 metros cuadrados por el que pagaron poco más de 112.000 euros. Sin embargo, después de que se lo ofreciera el banco, añadieron a esa hipoteca un crédito personal para reformar la vivienda que hizo que la deuda se fuera hasta los 200.000 euros.

Jesús trabajaba en la construcción y, como tanto otros compañeros, al cabo de unos años se quedó sin empleo, la misma situación en la que estaba su mujer. Y ahí empezaron

los problemas para cumplir con la cuota de casi 700 euros mensuales. Empezaron los impagos y el «acoso» y las amenazas de desahucio por parte del banco, el BBVA. «Hasta que un día me llamaron mis hijas por teléfono -tiene una de 23 y otra de ocho- y me dijeron que había ido la Policía para echarnos de casa», recuerda con dolor. «Al final se aplazó porque un procurador del juzgado dijo que no se podía hacer debido a la presencia de un menor», explica. El matrimonio intentó negociar con el banco, pero sin mucho éxito. «Un día el director de la oficina le llegó a decir a mi mujer que si no podíamos ir a un cruceiro, que nos quedáramos en casa», añade. Finalmente decidieron recurrir a Stop Desahucios, que

no pudo evitar el lanzamiento, pero consiguió un alquiler social de 150 euros para esta familia en la vivienda que hasta hace unos años era suya. Ahora es del banco, aunque los conflictos con la entidad financiera no han terminado. Jesús y Algimira no consiguieron la dación en pago y ahora el banco les reclama cien mil euros. Se da la circunstancia de que Jesús se ha vuelto a quedar sin trabajo hace unos días y cree que la liquidación que va a cobrar podría acabar en manos del banco, como la prestación por desempleo posterior. Actualmente está negociando en el juzgado el aplazamiento de este embargo. «Que me digan cómo voy a vivir, porque mis hijas siguen comiendo a final de mes», concluye.

tes dentro del debate político en los últimos meses por la celebración de las dos elecciones generales, aunque sin que se haya podido solucionar un problema de primer orden.

El propio concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, se marcó hace un año entre sus principales objetivos el poner fin a esta situación. Para ello llegó a ofrecer a las entidades financieras suelo municipal a cambio de las viviendas que fueran a ser objeto de desahucio, con el objetivo de que el equipo de Gobierno pudiera ofrecer después un alquiler social. Pero las negociaciones no fueron todo lo bien que él esperaba y ahora se trabaja en otras dos vías.

Por un lado, se han mantenido varias reuniones para poner en marcha la mesa de intermediación hipotecaria, creada a raíz de un acuerdo en un Pleno del año pasado. En estos encuentros está participando la Concejalía de Servicios Sociales, el Grupo Municipal Sí se Puede Valladolid. También se han mantenido reuniones con el Colegio de Abogados y en los próximos meses se unirán otros colectivos. «Se convocará a interlocutores de los bancos, a representantes del Juzgado y a asociaciones contra los desahucios», explica el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia.

La otra vía de trabajo es la preparación de dos convenios con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, «que podrían fusionarse en uno solo», relacionados con la vivienda y los alquileres sociales. Uno es para coordinar la gestión del parque público de vivien-

El primer trimestre ha roto la tendencia descendente de los últimos dos años

das con destino al alquiler social y el otro propone hacer lo propio con la información en materia de vivienda que manejan ambas administraciones.

De los 167 desahucios del primer trimestre en Valladolid, 90 fueron por el impago del alquiler, 66 por no hacer frente a las cuotas hipotecarias y once por otros motivos, según la estadística publicada por el CGPJ. Además, cabe destacar que el primer trimestre de 2016 ha roto con una tendencia descendente de los desahucios en los dos últimos años. De los 672 lanzamientos de 2013 se pasó a los 603 de 2014 y los 540 del año pasado.

El proceso de desahucio comienza con el impago de tres cuotas consecutivas de la hipoteca. En ese momento la entidad financiera puede iniciar la ejecución hipotecaria (85 casos en Valladolid en el primer trimestre) y acude al Juzgado para rescindir el contrato. Llegados a ese punto, al deudor solo le queda la opción de pagar íntegramente la deuda. Como no puede hacerlo, la entidad financiera solicita el embargo de la vivienda a su favor y se queda con ella